

Expediente Núm. 58/2016  
Dictamen Núm. 59/2016

**V O C A L E S :**

*Fernández Pérez, Bernardo,*  
Presidente  
*García Gutiérrez, José María*  
*Zapico del Fueyo, Rosa María*  
*Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis*  
*Fernández Noval, Fernando Ramón*

Secretario General:  
*García Gallo, José Manuel*

El Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2016, con asistencia de los señores y la señora que al margen se expresan, emitió el siguiente dictamen:

“El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud de esa Alcaldía de 16 de febrero de 2016 -registrada de entrada el día 19 del mismo mes-, examina el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Villaviciosa formulada por ....., por las lesiones sufridas al introducir el tacón de su zapato en una rejilla de alcantarillado.

De los antecedentes que obran en el expediente resulta:

**1.** Con fecha 5 de julio de 2013, la interesada presenta en el registro del Ayuntamiento de Villaviciosa una reclamación de responsabilidad patrimonial por “los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente acaecido en la vía pública” el día 22 de junio de 2013.

Señala que el percance sucedió “cuando iba transitando por la calle ..... junto a mi marido (...), mi hermana (...) y mis amigos”, y precisa que sufrió “un traumatismo en el tobillo izquierdo al introducir el tacón de su zapato en la rejilla del alcantarillado situado en la vía pública de la citada calle y quedarse atascado dicho tacón, produciéndose como resultado un esguince de grado uno del citado tobillo y fractura del 5.º metatarsiano del pie izquierdo”.

Adjunta los siguientes documentos: a) Resumen de su historia clínica en el Centro de Salud ....., de 4 de julio de 2013, en el que consta su edad (38 años) y el diagnóstico de “traumatismo por torsión tobillo izdo. el 22-06-13 como consecuencia de haber introducido tacón de zapato en rejilla de alcantarillado (...). Como resultado presenta esguince del tobillo izdo. y fractura de 5.º metatarsiano pie” izquierdo. b) Informe del Servicio de Urgencias del Hospital ....., de 23 de junio de 2013, con la impresión diagnóstica de “esguince (de) tobillo I. Fractura 5.º metatarsiano I”. c) Parte médico de baja de incapacidad temporal por contingencias comunes, de 24 de junio de 2013. d) Partes médicos de confirmación de incapacidad temporal, de 27 de junio y 4 de julio de 2013.

**2.** Mediante Resolución de 23 de agosto de 2013, el Alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa acuerda “incoar expediente de responsabilidad patrimonial” y designar instructor y secretario del procedimiento, lo que se comunica a la perjudicada el 29 de agosto de 2013.

**3.** Con fecha 27 de agosto de 2013, el Instructor del procedimiento remite una copia de la reclamación a la empresa concesionaria del servicio de alcantarillado “a fin de que emita informe sobre la misma”.

El día 12 de septiembre de 2013, un representante de la citada empresa informa que “personados los técnicos (...) en el lugar de los hechos certifican que se trata de una rejilla de alcantarilla sita en zona peatonal destinada a la recogida de aguas pluviales./ Que (...) la rejilla se encuentra en perfecto estado, sin que pueda apreciarse rotura alguna./ Que (...) la rejilla se

encontraba perfectamente localizada en su lugar natural, sin apreciarse tampoco desnivel alguno ni en la colocación de la tapa ni en las baldosas de la acera que la circundan./ Finalmente (...), la rejilla de alcantarillado referenciada cumple con los estándares oficiales de este tipo de materiales, por lo que esta concesionaria declina cualquier tipo de responsabilidad en la reclamación formulada”.

**4.** El día 23 de septiembre de 2013, el Intendente-Jefe de la Policía Local reseña que “consultados nuestros archivos no existe anotación alguna sobre intervención policial en dicho suceso./ Revisada la calle ..... (zona peatonal de mucho tránsito de viandantes) no se observa ninguna alcantarilla defectuosa o peligrosa en condiciones normales, aunque sí es posible que se meta un tacón fino entre los barrotes de la reja cuya separación es de 3 centímetros”.

**5.** Con fecha 27 de septiembre de 2013, un representante de la perjudicada presenta un escrito en el registro del Ayuntamiento de Villaviciosa en el que manifiesta que los huecos de la rejilla en los que su representada introdujo el tacón de su zapato izquierdo “tienen una anchura de 3 cm”, y solicita la práctica de prueba testifical, identificando a tres personas.

Acompaña a su escrito copia de los siguientes documentos: a) Escritura de poder general para pleitos otorgada a favor del letrado actuante por la interesada. b) Fotografías de la rejilla, de la calle en la que se ubica y de un zapato de tacón desde diversas perspectivas. c) “Ticket de compra de los zapatos”. d) Partes médicos de baja y de confirmación de incapacidad laboral. e) Diversos informes médicos sobre la atención sanitaria recibida por la interesada en el Hospital .....

**6.** El día 19 de diciembre de 2013 emite informe el Arquitecto Superior, Jefe de la Oficina Técnica Municipal de Arquitectura. En él se indica que “el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras del Principado de Asturias, Decreto 37/2003, de 22 de mayo, en su artículo 10, apartado c), establece que `Las

aberturas de los huecos de las rejas y registros situados al nivel del pavimento serán tales que, como máximo permitan la inscripción en su interior de círculos de 2 cm de diámetro ´´. Adjunta copia del referido Reglamento.

**7.** Con fecha 18 de marzo de 2014, el representante de la interesada presenta un escrito en el registro municipal en el que comunica que el 24 de enero de 2014 se produjo su alta médica. En consecuencia, cuantifica la indemnización pretendida en diecinueve mil cuatrocientos diez euros con ochenta y cinco céntimos (19.410,85 €), que desglosa en los siguientes conceptos: 216 impeditivos; 5 puntos de secuelas, consistentes en “talalgia/metatarsalgia”, y un 10% de factor de corrección sobre las secuelas, así como los gastos de adquisición de zapatos; facturas de taxi, de medicamentos y dispositivos ortopédicos; de consulta al fisioterapeuta, y del servicio doméstico asistencial que dice haber precisado durante el tiempo en el que estuvo de baja.

Aporta copia de los partes de confirmación de la baja y del alta médica, de informes del Servicio de Rehabilitación del Hospital ..... y de facturas por los conceptos reseñados.

**8.** Mediante oficio de 9 de junio de 2014, el Instructor del procedimiento traslada a la empresa concesionaria del servicio de alcantarillado una copia del informe del Arquitecto Superior Municipal y le solicita una ampliación del ya emitido.

El día 16 de junio de 2014, un representante de la mencionada empresa presenta un escrito en el registro municipal en el se ratifica en su informe anterior y precisa que “la rejilla de alcantarilla referenciada, instalada cuando se urbanizó la calle ....., está entre los modelos que se fabrican e instalan en las vías públicas para la recogida de aguas pluviales”.

**9.** El día 27 de junio de 2014, el Instructor del procedimiento remite una copia del expediente a la compañía aseguradora “a fin de que una vez examinado se sirvan emitir informe al respecto”.

**10.** Con fecha 2 de julio de 2014, el Instructor del procedimiento declara procedentes y admite las pruebas propuestas, tanto la documental como la testifical, por lo que envía la pertinente citación a los testigos y comunica a la reclamante el día y hora en que se practicará la misma, “a cuyo efecto le solicitamos nos aporte el pliego de preguntas que considere oportuno”.

El día 7 de julio de 2014, el representante de la interesada presenta un escrito en el que consigna las preguntas que estima han de formularse a los testigos.

Obran incorporadas al expediente las actas de las declaraciones testificales efectuadas el día 8 de julio de 2014. El primer testigo declara que tiene relación de amistad o parentesco con la interesada y que presenció el accidente, precisando que “veníamos caminando tranquilamente, sin conversación, para ir para casa”, por la zona peatonal y “de repente metió el pie en la alcantarilla, retorció el tobillo y cayó; después tuvimos que tirar del zapato para sacarlo”. Manifiesta que desconoce si el accidente se produjo de manera imprevisible y a consecuencia de la indebida ubicación y características de la rejilla, y señala que esta estaba colocada “en una vaguada para el agua”, próxima a las terrazas, en “una zona de acera delimitada a los lados, y hay una cárcava de hormigón para el agua”. Interrogado sobre si “es cierto que pudo advertir que el ancho de los huecos de las rejillas de alcantarilla eran excesivos y se hallaban en disposición de causar daño”, responde que eso “es un poco subjetivo”. Aclara que los zapatos eran “de tacón, un poco alto”, de ancho “normal”, aunque repreguntado nuevamente reseña que “un poquito ancho. Quiero decir que no era un tacón de aguja”.

El segundo testigo manifiesta ser el marido de la reclamante y afirma que presenció el accidente, describiéndolo de modo coincidente con el anterior. Especifica que la rejilla está situada en una zona peatonal en la que hay una “canaleta de otro color”, y que reclamaron porque “nos dijeron que (el hueco de la rejilla) era más ancho de lo que tenía que ser”.

La tercera testigo declara ser amiga de la interesada y haber presenciado el accidente. Desconoce si este se produjo a consecuencia de la indebida ubicación y características de la rejilla, y declara que “se ve bien al lado del portal”. Tampoco puede indicar si los huecos de la alcantarilla eran excesivos.

**11.** Mediante Resolución de la Alcaldía de 20 de octubre de 2015, se designa una nueva Instructora del procedimiento, lo que se comunica a la interesada el día 27 del mismo mes.

**12.** Con fecha 10 de noviembre de 2015 emite informe sobre la reclamación el Ingeniero Municipal. En él señala que la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, indica que “Las rejas tendrán una abertura máxima de malla y una disposición del enrejado que impida el tropiezo de las personas que utilicen bastones o sillas de ruedas”, y que el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto del Principado de Asturias 37/2003, de 22 de mayo, dispone en su artículo 10, apartado c), que “Las aberturas de los huecos de las rejas y registros situados al nivel del pavimento serán tales que, como máximo permitan la inscripción en su interior de círculos de 2 centímetros de diámetro que impidan el tropiezo de las personas que utilicen bastones o sillas de ruedas”. Añade que la norma citada no será de aplicación a los proyectos de edificación y urbanización anteriores a su entrada en vigor, precisando que el proyecto de saneamiento e infraestructura de la calle ..... fue redactado en marzo de 1991, y que “la rejilla del sumidero donde presuntamente se introdujo el tacón (...) se encuentra en una rígora badén que delimita longitudinalmente la acera de la calzada, ambas peatonales. Dicho badén se encuentra en un plano distinto, tanto al de la acera como al de la calzada. La función del badén es la de canalizar longitudinalmente las aguas de escorrentía hacia los sumideros situados a lo largo del mismo, los cuales se encuentran físicamente dentro de las dimensiones del propio badén, sin invadir, en ningún momento, ni la acera ni la calzada. Tanto la acera como la calzada tienen un pavimento formado por baldosas con distinta tipología y

disposición, en colores crema y granate, mientras que el badén está ejecutado con hormigón *in situ*, color gris. Apreciándose la diferencia entre los distintos ámbito (...). Aparentemente, (la reclamante) no requería para trasladarse de la ayuda ni de bastón ni de silla de ruedas”.

**13.** Mediante oficio notificado a la interesada el 30 de diciembre de 2015, la Secretaria del procedimiento le comunica la apertura del trámite de audiencia por un plazo de diez días y le adjunta una relación los documentos que integran el expediente.

El día 12 de enero de 2016, el representante de la perjudicada presenta un escrito de alegaciones en el que se ratifica en la pretensión indemnizatoria y en su cuantía, argumentando que los huecos de la rejilla incumplían el ancho máximo -2 cm- dispuesto por el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, y si bien reconoce que la finalidad de la norma es impedir “el tropiezo de las personas que utilizan bastones o sillas de ruedas”, se pregunta si “acaso no es igualmente legítima la protección de toda mujer que, como es el caso, emplee una prenda tan usual con son unos zapatos de tacón”, y si en el caso de que “se tratara de un bebé que está empezando a caminar cuyo minúsculo pie es el que se introduce en la holgada separación existente entre barrotes (...) podría no ampararle el derecho por no tratarse de una persona que emplea bastón o silla de ruedas”.

**14.** Con fecha 15 de febrero de 2016, la Instructora del procedimiento formula propuesta de resolución en sentido desestimatorio.

**15.** En ese estado de tramitación, mediante escrito de 16 de febrero de 2016, esa Alcaldía solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Villaviciosa objeto del expediente núm. ...., adjuntando a tal fin copia autenticada del mismo.

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones fundadas en derecho:

**PRIMERA.-** El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villaviciosa, en los términos de lo establecido en los artículos 17, apartado b), y 40.1, letra b), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente.

**SEGUNDA.-** Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está la interesada activamente legitimada para formular reclamación de responsabilidad patrimonial, por cuanto su esfera jurídica se ha visto directamente afectada por los hechos que la motivaron.

El Ayuntamiento de Villaviciosa está pasivamente legitimado en cuanto titular de los servicios frente a los que se formula reclamación.

**TERCERA.-** En cuanto al plazo de prescripción, el artículo 142.5 de la LRJPAC dispone que “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”. En el supuesto ahora examinado, la reclamación se presenta con fecha 5 de julio de 2013, habiendo tenido lugar los hechos de los que trae



origen el día 22 de junio de 2013, por lo que es claro que fue formulada dentro del plazo de un año legalmente determinado.

**CUARTA.-** El procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de la reclamación se encuentra establecido en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC, y, en su desarrollo, en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (en adelante Reglamento de Responsabilidad Patrimonial), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

En aplicación de la normativa citada, se han cumplido los trámites fundamentales de incorporación de informe de los servicios afectados, audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución.

Sin embargo, advertimos la concurrencia de determinadas irregularidades formales en la tramitación del procedimiento. La primera de ellas consiste en que no se ha dado cumplimiento a la obligación de comunicar a la interesada, en los términos de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la LRJPAC, la fecha en que su solicitud ha sido recibida por el órgano competente, el plazo máximo legalmente establecido para la resolución -y notificación- del procedimiento, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

Asimismo, observamos que la Alcaldía resuelve “incoar expediente de responsabilidad patrimonial” cuando su inicio emana de la reclamación de la interesada. Este Consejo ha manifestado en numerosos dictámenes que en los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada -y este lo es (artículo 6 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial, en relación con el artículo 68 de la LRJPAC)- la mera presentación de la reclamación supone de suyo la incoación del mismo.

Igualmente, hemos de llamar la atención sobre la paralización del procedimiento, sin justificación aparente, entre julio de 2014 y octubre de 2015, lo que resulta contrario al principio de eficacia administrativa. Esto, unido al tiempo empleado en la tramitación del mismo, provoca que a la fecha de

entrada de la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo se haya rebasado ya el plazo de seis meses para adoptar y notificar la resolución expresa, establecido en el artículo 13.3 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial. No obstante, ello no impide la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43.3, letra b), de la referida LRJPAC.

**QUINTA.-** El artículo 106.2 de la Constitución dispone que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC establece en su apartado 1 que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. Y, en su apartado 2, que “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

Por otra parte, el artículo 141 de la ley citada dispone en su apartado 1 que “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.

En el ámbito de la Administración local, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), dispone que “Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa”.

Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las circunstancias concurrentes en cada caso.

En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y atendida la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurren, al menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de una lesión o daño antijurídico, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea producto de fuerza mayor.

**SEXTA.-** Se somete a nuestra consideración el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por una reclamación de daños ocasionados por una caída en una vía pública de Villaviciosa, el día 22 de junio de 2013, al introducir el tacón del zapato en una rejilla de alcantarillado.

La perjudicada aporta prueba testifical del accidente, y documental consistente en los informes del centro de salud y del Servicio de Urgencias de un hospital público en el que figuran las lesiones que se le diagnosticaron en la atención dispensada tras la misma -esguince de grado uno en el tobillo izquierdo y fractura del 5.º metatarsiano del mismo pie-, por lo que debemos apreciar la realidad del daño alegado.

Ahora bien, la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado no puede significar por sí misma la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, toda vez que es preciso

examinar si se dan las circunstancias que permitan reconocer a la reclamante el derecho a ser indemnizada por concurrir los demás requisitos legalmente exigidos. En concreto, debe analizarse si los perjuicios alegados son consecuencia directa e inmediata del funcionamiento de un servicio público del Ayuntamiento de Villaviciosa, en cuanto titular de la vía en la que se produjo el accidente, para lo cual debemos examinar en primer lugar las circunstancias en las que ocurrió.

En el análisis del nexo causal hemos de partir de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la LRBRL vigente en el momento de producirse los hechos, según el cual corresponde a la Administración municipal prestar el servicio público de pavimentación y conservación de las vías públicas urbanas en condiciones tales que garanticen la seguridad de quienes las usan y frecuentan, siendo responsable, en principio, de las consecuencias dañosas derivadas de su estado defectuoso. Como venimos sosteniendo en dictámenes anteriores, en ausencia de estándares objetivos legalmente impuestos las obligaciones del servicio público han de ser definidas en términos de razonabilidad. También hemos reiterado que, como contrapunto a la obligación que pesa sobre la Administración de conservación de las condiciones de uso del servicio público viario, toda persona que transite por la vía pública ha de ser consciente de los riesgos consustanciales a tal actividad, al igual que ha de serlo de la posible existencia de pequeñas irregularidades en el pavimento, a veces adoquinado, de mobiliario urbano diverso, de bolardos y tapas de registro y de rejillas de alcantarillado, adoptando la precaución necesaria en función de las circunstancias manifiestas de la vía pública, así como de las atmosféricas y las concurrentes en la propia persona.

La interesada refiere que los daños se produjeron en una zona peatonal al introducir el tacón de su zapato en una rejilla del alcantarillado destinado a la recogida de aguas pluviales. Unos meses después reitera que el “accidente” se originó al introducir el tacón entre los huecos de una rejilla, precisando que “es de destacar que los indicados huecos tienen una anchura de 3 cm”.

De esta escueta afirmación hemos de presumir que se imputa el percance al hecho en sí de que la Administración, para encauzar las aguas pluviales o de riego y darles salida hacia la red de alcantarillado, disponga en los sumideros de las vías públicas, tanto en ríolas como en badenes, de un concreto tipo de rejillas. En efecto, no reprocha la reclamante el estado de la rejilla, ni su ubicación, ni siquiera su visibilidad, pues aunque en el periodo de alegaciones afirme que la rejilla “no destaca en modo alguno”, también reconoce que “la acera y la calzada tienen un pavimento formado por baldosas con distinta tipología y disposición en colores crema y granate”, y que el badén en el que se ubica la rejilla, de metal oscuro, “está ejecutado con hormigón color gris”. Reprocha exclusivamente que los huecos de la rejilla tengan una anchura de 3 cm.

Sobre esta concreta imputación, y a la vista de las fotografías que ella misma aporta, este Consejo Consultivo, como recuerdan los distintos informes que obran en el expediente, comprueba que se trata de una rejilla ordinaria, de un tipo común a los presentes en el viario público de muchas de nuestras villas y ciudades. Una rejilla no mallada, sino nervada, con una estructura que se atiene a su función de drenaje, por lo que no es una pieza metálica ciega, sino con huecos o imbornales por los que llegado el caso discurre el agua, y dispuestos, en una conformación rectangular, mediante seis nervios ligeramente cóncavos paralelos a los lados de menor longitud del rectángulo y perpendiculares a los más largos. Una rejilla, en definitiva, que no origina peligro alguno en el deambular de un paseante si se le presta atención.

Es cierto que el hueco entre los nervios de la rejilla es de tres centímetros. Y lo es también que esta anchura excede de los dos centímetros que el artículo 10, apartado c), del Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, en los Ámbitos Urbanísticos y Arquitectónicos, aprobado por Decreto 37/2003, de 22 de mayo, exige en las aberturas de los huecos de las rejas y registros situados al nivel del pavimento, pero con la específica finalidad de impedir “el tropiezo de las personas que utilizan bastones o sillas de ruedas”.

Con independencia de que, de conformidad con la disposición transitoria segunda, letra a), del Decreto aprobatorio del citado Reglamento, y como recuerda en su informe el Ingeniero Municipal, estas exigencias no rigen para un proyecto como el controvertido, que es anterior a la entrada en vigor del Decreto, es doctrina de este Consejo que el preámbulo de la invocada Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, justifica la aprobación de la misma en el cumplimiento de diversos objetivos relacionados con “la mejora de la calidad de vida de toda la población, y específicamente de las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación”, con base en las previsiones constitucionales plasmadas en los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución y en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Este encuadre obliga, en lo que ahora interesa y en cuanto a la valoración de la existencia de un posible anormal funcionamiento del servicio público en la elección en 1991 de un determinado tipo de rejilla, a descartar que las disposiciones de la norma autonómica, en cuanto traslación a su vez de la legislación estatal mencionada, se constituyan de manera automática en parámetro o estándar objetivo de valoración del funcionamiento del servicio de mantenimiento de vías públicas cuando el afectado no pertenece al colectivo de especial protección al que propiamente se destinan las prescripciones normativas examinadas; sin perjuicio del valor hermenéutico que pueda atribuírsele a tal normativa especial, que acaso impulse en un futuro a las diversas Administraciones públicas a optar con carácter general en las obras de drenaje, si el coste lo tolera, por rejillas antitacón.

Este Consejo ha señalado reiteradamente que lo que ha de demandarse del servicio público es la adecuada diligencia para que un riesgo mínimo no se transforme, por su acción u omisión, en un peligro cierto, pero no que elimine o, en su defecto, cubra todo tipo de riesgos, porque se convertiría en un seguro universal que trasladaría a la sociedad en su conjunto la responsabilidad de cualquier manifestación dañosa de sucesos o accidentes que, aunque ocurran en un espacio público o con ocasión del uso de un servicio público, debe soportar el particular como riesgos generales de la vida individual y colectiva.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamina que no procede declarar la responsabilidad patrimonial solicitada y, en consecuencia, debe desestimarse la reclamación presentada por .....

V. I., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Gijón, a .....

EL SECRETARIO GENERAL,

V.º B.º

EL PRESIDENTE,

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA.